



Con fecha 3 de octubre de 2017, tuvo entrada en este Instituto su solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud presentada por [redacted], que quedó registrada con el número 18316. A partir de dicha fecha, empieza a contar el plazo de un mes para su resolución, según lo previsto en el artículo 20.1 de la mencionada Ley.

En su escrito hace referencia a la desestimación resuelta por este Organismo, con fecha 31 de mayo de 2017, en relación con una solicitud de acceso a la información realizada por [redacted] respecto de una denuncia por él planteada; y usted manifiesta tener legitimidad para efectuar la solicitud aportando una sentencia judicial, en la que es parte, que resuelve un conflicto laboral con Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y Asociación para la Gestión de Centros Infantiles.

En su instancia usted solicita la siguiente información en relación con las actuaciones llevadas por este Organismo sobre la denuncia efectuada por [redacted]:

“

1. *Acciones y/o gestiones realizadas con motivo de la denuncia y detalle de las mismas.*
2. *Resoluciones y/o recomendaciones dictadas.*
3. *En cumplimiento de la Ley 19/2013, copia de los documentos, peticiones de información y sus respuestas, solicitado con motivo de la “Denuncia Pública” presentada el pasado 28 de febrero.*

“

En relación con su solicitud, cabe señalar que, de acuerdo con lo establecido el apartado 2 de la Disposición Adicional primera de la citada Ley 19/2013 (Regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública), “*se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.*”

El acceso a la información en relación con la función supervisora pública de la actividad de auditoría de cuentas, se rige por su normativa específica, la Ley 22/2015, de 20 de julio, de



Auditoría de Cuentas, cuyo artículo 60.1, bajo el título “Confidencialidad y deber de secreto”, dispone:

*“1.Las informaciones o datos que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de supervisión pública y control de la actividad de auditoría de cuentas previstas en esta Ley tendrán carácter confidencial y no podrán ser divulgados o facilitados a ninguna persona o autoridad.”*

A continuación, en los puntos 3 y 4, el precepto contiene una lista cerrada con los excepcionales casos de cesión de datos que puede producirse, limitados a unos casos por razón de la naturaleza de la información y en otros por razón de la especial cualificación de la persona o entidad beneficiaria, no siendo posible en ningún supuesto la cesión de datos a terceros que no tengan esta naturaleza.

Por otra parte, la presente solicitud incide directamente sobre algunos de los límites al derecho de acceso establecidos en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 (investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control).

En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.1 y 20.3 y en el apartado 2 de la Disposición Adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en el artículo 60 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas; se resuelve DENEGAR el acceso a la información solicitada.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante órgano judicial competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente Resolución, ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

Madrid, 31 de octubre de 2017

EL PRESIDENTE

Fdo.: Enrique Rubio Herrera